



Bogotá D.C. 14 de mayo de 2020

Señora

JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA

j1lbarau@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.

S.

D.

REF:

Acción de Tutela No. 2020-069

Accionante: **CARLOS ALBERTO GUERRERO HURTADO**

Contra: **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL, POLICÍA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y OCCIDENTAL DE COLOMBIA. LLC, vinculados MINISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DEL TRABAJO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER y otros.**

H. Señora Juez:

JUAN FERNANDO ACEVEDO LIZCANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.409.120 de Bogotá, actuando en mi condición de Apoderado General Suplente de **OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC**, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal que adjunto, por medio del presente escrito y atendiendo el requerimiento efectuado por ese Despacho mediante oficio del 12 de mayo de 2020, con No. JLCA 970, notificado a mi representada el mismo día, doy contestación dentro del término otorgado, a la acción de tutela de la referencia en los siguientes términos:

I. DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

El artículo 86 de la C.P. estableció la Acción de Tutela como un procedimiento preferente y sumario, por medio del cual cualquier persona podría pretender la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resultaran vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Tratándose de particulares, restringió su aplicación a que la conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes se encuentren en estado de subordinación o indefensión.

Igualmente, determinó de manera clara que sólo procedería cuando el afectado no dispusiera de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA POR AUSENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE

Sobre el concepto de perjuicio irremediable la Corte Constitucional se ha pronunciado, entre otras, en sentencia T-956 de 2013 precisando:



*“En cuanto a la cualificación de los hechos que configuran la inminencia de un perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional ha contemplado que ese perjuicio **(i) debe ser inminente; (ii) debe requerir de medidas urgentes para ser conjurado; (iii) debe tratarse de un perjuicio grave; y (iv) solo puede ser evitado a partir de la implementación de acciones impostergables.** El perjuicio ha de ser inminente: “que amenaza o está por suceder prontamente”. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética”.*

En este sentido, es preciso destacar que de los hechos narrados por el accionante no se evidencia la existencia de un perjuicio para él, y menos con la connotación de irremediable, que es, como se observa de la providencia transcrita, un requisito necesario para acudir a la acción de tutela.

IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA CON BASE EN EL PRINCIPIO DE PRECAUCION

El actor plantea la procedencia de la acción de tutela con base en el principio de precaución. Sin embargo, además de que este no constituye un requisito de procedibilidad de la misma, tal principio no es aplicable al caso concreto y mucho menos bajo el entendimiento errado que el accionante se encuentra amparado por él.

En efecto, contrario a lo que se plantea en el escrito introductorio, lo que predica el principio de precaución es que la inexistencia o falta de certeza científica absoluta respecto de los impactos de una determinada actividad, no constituye una justificación para que no se tomen o establezcan medidas para prevenir o mitigar los efectos de la misma. El principio de precaución, entonces, no implica prohibición del desarrollo de una actividad sino la necesidad de implementar medidas de prevención o mitigación a sus potenciales efectos.

En el caso puntual del Covid 19, se tienen evidencias científicas sobre los efectos que este produce, por lo que no existe una falta de certeza científica absoluta y en tal virtud, se han establecido, precisamente, mecanismos de prevención y mitigación como la declaración de estado de emergencia, el aislamiento preventivo obligatorio y la necesidad de aplicar protocolos de bioseguridad, todas las cuales se han adoptado precisamente porque se conocen sus efectos.

Aceptar lo que propone y peticiona el accionante enmarcado en un concepto de principio de precaución errado, implicaría la necesidad de prohibir en el municipio y en el departamento toda actividad de las exceptuadas, incluida, entre otras, aquellas de transporte y abastecimiento de productos de primera necesidad, e incluso, la prohibición de las actividades exceptuadas que desarrollan personas foráneas o locales pues el riesgo de contagio no sería distinto en uno o en otro caso, máxime si se tiene en cuenta que existe una persona (por lo menos conocida) contagiada con el virus, desde antes, incluso, al empleado de la empresa contratista que fue diagnosticado. Lo anterior, además, iría en contra de lo establecido en el Decreto 636 de 2020



que dispone que cualquier prohibición de actividades exceptuadas debe contar con el aval del Ministerio del Interior.

El planteamiento del accionante relacionado con el principio de precaución, no se puede considerar de manera aislada frente la actividad petrolera sin dejar de analizar esas otras actividades que asimismo requieren de personas de afuera de Arauca, que también están exceptuadas por un decreto con carácter de ley de la máxima autoridad de policía y respecto de las cuales, en contraste a lo que ocurre con mi representada, se desconoce si se les ha aplicado o exigido con anterioridad la prueba de Covid 19, a lo menos cuando las personas que desarrollan esas otras actividades se encuentran en Arauca.

En este orden de ideas, obsérvese que frente a los derechos fundamentales alegados por el accionante y frente a la procedencia de la tutela basado en una concepción errada del principio de precaución, las solicitudes relacionadas con suspensión de vuelos e imposibilidad de desarrollar actividades con personas de afuera de Arauca no tiene ningún efecto práctico, mucho menos cuando, por un lado, en el caso de mi representada se han venido cumpliendo los protocolos e incluso se han tomado las pruebas de Covid 19 correspondientes, y por otro lado, cuando desde el 11 de mayo es obligatorio para las personas de afuera de Arauca que desarrollen cualquiera de las actividades exceptuadas, que presenten la prueba del Covid -19 con resultado negativo.

En el caso concreto del accionante que aduce pertenecer a la población mayor de 60 años, la norma le impone el deber de cumplir con las medidas de aislamiento bajo unas condiciones más estrictas de manera que, de entrada, depende de él asumir las conductas necesarias de prevención y mitigación establecidas en la ley para evitar el contagio y la propagación de esta lamentable enfermedad.

LOS EFECTOS DE LA TUTELA NO TIENEN EFECTOS GENERALES NI COLECTIVOS

Se pone igualmente de presente a la H. Señora Juez que las solicitudes de la acción de tutela, en el hipotético evento en que se acceda a ella, no pueden exceder la órbita individual del accionante respecto del cual debe efectuarse el análisis individual de la puesta en riesgo o vulneración de los derechos fundamentales que alega vulnerados.

En el caso concreto, además de que no existe conducta alguna imputable a mi representada que ponga en riesgo o vulnere derechos del accionante, es claro que la mayoría de las solicitudes que formula son improcedentes pues sus efectos exceden la individualidad del accionante.

Obsérvese que la presente acción no se presenta de manera subsidiaria pues nada se indica en la tutela, tampoco se prueba o plantea la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia excepcional de la tutela, como mecanismo alternativo a las acciones previstas por la ley para la adopción de medidas de carácter colectivo.



INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SALUD Y A LA VIDA

El H. Juzgado se servirá tener en cuenta que no se acredita conducta alguna que sea imputable a mi representada como vulneradora de los derechos fundamentales del accionante. No se evidencia cuál es la conducta imputable a Oxy que le impida acudir a los servicios de salud y que como consecuencia de ese impedimento pueda comprometer su vida.

El núcleo esencial del derecho a la salud se centra en la posibilidad de acceder a los servicios de salud, en el escrito de la tutela no se plantea si quiera cuál es la conducta que mi representada ha desplegado para que ello no sea así.

En este punto debe tenerse en cuenta que desde el inicio de la emergencia mi representada ha adoptado las medidas previstas en los distintos protocolos y circulares que ha emitido el gobierno nacional, incluso yendo más allá de lo que los mismos disponen.

De la misma manera debe tenerse en cuenta que el derecho al medio ambiente sano, que se estima violado por el accionante, no tiene el carácter de fundamental y en adición a que no se logra comprender cuál sería el motivo de vulneración, tal y como se indicó anteriormente y se reitera, las acciones destinadas por la ley para su protección no corresponden a la acción de tutela.

Las pretensiones incoadas por el accionante en su mayoría se encuentran dirigidas a las autoridades nacionales, y en lo que atañe a mi representada, se trata de solicitudes sin ningún respaldo legal o constitucional, que por la misma razón resultan inadmisibles. En efecto, lo que pretende el actor frente a mi representada, es que se ordene que se abstenga de importar trabajadores para su operación directamente o a través de contratistas; que participe económicamente con las acciones y medidas sanitarias que adelante la UAESA y la Secretaria de Salud Municipal; que establezca acciones coordinativas con la UAESA para prevenir la llegada de personas infectadas y que se abstenga de contratar personas que residan fuera del departamento, incluyendo en este ítem a los trabajadores de contratistas.

Estas pretensiones, que se reitera, no tienen ningún fundamento normativo, se formulan además sobre una premisa fáctica errónea, cual es que presuntamente el Covid19 habría arribado a la ciudad de Arauca por la actividad de Occidental de Colombia, LLC, quien según la afirmación del accionante habría desconocido preceptivas legales explícitas y asumido conductas inseguras. Así, y dadas las afirmaciones temerarias contenidas en la acción de tutela, además de los argumentos de improcedencia ya expuestos, se hace necesario pronunciarnos frente a cada uno de los hechos, para posteriormente profundizar en algunos aspectos necesarios para claridad del Despacho.



II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

El hecho 1: Es cierto que existe una afectación mundial derivada del virus denominado COVID19.

Los hechos 1.2 a 1.5: No son hechos sino apreciaciones del actor frente a normas que han sido expedidas por el Gobierno Nacional en virtud del Estado de emergencia declarado en Colombia, apreciaciones frente a las que y para mayor claridad del Juzgado, debemos señalar:

El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, declaró como pandemia el Coronavirus Covid-19, instando a los Estados a tomar las acciones necesarias para morigerar el riesgo de propagación. Un día después de tal declaratoria, el 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución 385 del 2020 declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19.

El día 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica¹ en todo el territorio nacional, en desarrollo del cual fueron expedidos un gran número de Decretos excepcionales.

Dentro de las medidas de excepción, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento obligatorio de todas las habitantes en el territorio nacional desde el pasado 24 de marzo, medida que se encuentra extendida en la actualidad hasta el próximo 25 de mayo del 2020².

No obstante, de la orden de aislamiento fueron exceptuadas ciertas actividades, entre ellas, las que corresponden al objeto social de Occidental de Colombia, LLC, así:

“29. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (...) (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para

¹ De conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia “*Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes (...)*”

² Los Decretos mediante los cuales se ha declarado y ampliado la medida de aislamiento preventivo social obligatorio son: Decreto 457 de 2020 expedido el 22 de marzo del 2020 ordenó dicha medida desde el 25 de marzo de 2020 hasta las 00:00 am del 13 de abril del 2020; Decreto 531 de 2020 expedido el 8 de abril del 2020 amplió la orden previamente referida del 13 al 27 de abril de 2020, el Decreto 593 del 2020 expedido el 24 de abril del 2020 prorrogó la medida de aislamientos desde el 27 de abril hasta las 00:00 del 11 de mayo de 2020 y el Decreto 636 de 2020 que actualmente se encuentra vigente, prorrogó la medida de aislamiento entre el 00:00 del 11 de mayo hasta las 00:00 del 25 de mayo de 2020.



la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP- (...)”³

En este sentido, mi representada, en cumplimiento de las disposiciones legales que no solo permiten sino que obligan a que los servicios mantengan su continuidad dada su naturaleza esencial y de vital importancia para el país, adoptó todos los protocolos y medidas de seguridad necesarios para evitar la propagación del virus Covid19, protocolos aplicables no solo a sus trabajadores, sino armonizados con los protocolos de bioseguridad de los contratistas como empleadores de personal que presta sus servicios en el campo.

En efecto, Occidental de Colombia, LLC ha construido e implementado los protocolos de bioseguridad necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, los cuales son permanentemente actualizados con el fin de que sean más robustos y se ajusten a los dinámicos entornos regulatorios. Este trabajo constructivo ha sido adelantado en conjunto con los contratistas, pues es claro que tanto Occidental de Colombia, LLC como las sociedades que hacen parte de la cadena de producción tenemos un objetivo común, que es la seguridad y salud de todas las personas.

Los protocolos de bioseguridad prevén no solo la actividad propia de la operación dentro del campo y el manejo de eventuales casos sospechosos, sino el ingreso y salida desde y hacia los hogares de los trabajadores, e incluso medidas de seguridad en el entorno personal de estos últimos al regresar a casa.

Vale la pena poner de presente que si bien mi representada ha dado cumplimiento estricto a lo previsto en las disposiciones legales que regulan el contenido de los protocolos de bioseguridad, y puntualmente a la Resolución 666 de 2020, con anterioridad a la misma ya había extremado las medidas necesarias para garantizar no solo un ambiente de trabajo seguro, sino que no se propagara el virus Covid19. Es así como una de las medidas más importantes implementada desde mediados de abril de 2020, lo fue la realización de pruebas moleculares para detectar el COVID19 al 100% de las personas que pretendían ingresar a los Campos Petroleros de las operaciones de Occidental de Colombia, LLC en Arauca, y por supuesto, al 100% de las personas que ingresaran con este propósito al Departamento de Arauca.

Lo anterior evidencia que las acciones que adelantó y adelanta mi representada van más allá del simple cumplimiento de la norma, pues genuinamente buscan el bienestar de la comunidad. Tal como es de conocimiento del Juzgado, únicamente con el Decreto 048 de 2020 proferido el 11 de mayo del mismo año, la Gobernación de Arauca estableció la obligación de llevar a cabo pruebas de PCR a las personas que pretendan ingresar al Departamento para laborar. Es decir, Occidental de Colombia, LLC prácticamente un mes antes del nacimiento de la obligación, adoptó la determinación de adelantar por su cuenta, con expertos, las pruebas moleculares necesarias para la detección del Covid19 en las personas que como se indicó, fueran a ingresar al Campo.

³ Numeral 25 del artículo 3° del Decreto 457 de 2020; numeral 28 del artículo 3° del Decreto 531 de 2020, numeral 28 del artículo 3° del Decreto 593 de 2020 y numeral 29 del artículo 3° del Decreto 636 de 2020



Es así como en el mes de abril fue contratado Colcan -laboratorio avalado por el Instituto Nacional de Salud- para llevar a cabo con celeridad los exámenes moleculares necesarios a personas asintomáticas⁴. Este aspecto es importante, no solo porque el Gobierno Nacional dado el poco número de test disponibles para el país, únicamente llevaba a cabo exámenes en personas con sintomatología, sino que los exámenes contratados por Occidental de Colombia, LLC con Colcan son mucho más rápidos por el volumen de muestras, contando con los resultados en un tiempo máximo de 72 horas.

Tanto los trabajadores de mi representada como los de los contratistas, hasta tanto no cuenten con el resultado que acredite que no son portadores del virus Covid19, no solo no pueden ingresar a Campo, sino que deben permanecer aislados como medida preventiva.

El hecho 1.6: No es un hecho sino la interpretación que lleva a cabo el accionante sobre la norma por él referenciada, tratando de hacer incurrir al Juzgado en error al asegurar que el servicio aéreo no puede prestarse para atender las actividades exceptuadas de la medida de aislamiento nacional que lo requieran.

De acuerdo con los Decretos en los que se ha definido y extendido la medida de aislamiento obligatorio preventivo, se encuentra exceptuada de esta medida la operación aérea y aeroportuaria, en tratándose de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía y caso fortuito o fuerza mayor.

En este sentido, y como es de conocimiento del Juzgado, el campo petrolero de Caño Limón se encuentra ubicado en el Departamento de Arauca, habiendo entre el Campo y la ciudad de Bogotá una distancia de aproximadamente 700 kilómetros. Cuando los trabajadores de mi representada o de los contratistas deben desplazarse hacia o desde el Campo Petrolero y hacia o desde un lugar con una distancia significativa, mientras haya la disponibilidad necesaria, ese desplazamiento se lleva a cabo en un charter privado, obviamente con la previa autorización de la Aeronáutica Civil y el cumplimiento de los protocolos legales y de seguridad necesarios.

Para efectos de lo anterior, Occidental de Colombia, LLC implementó un protocolo de bioseguridad que incluye el seguimiento de las condiciones de salud mediante el diligenciamiento de declaraciones de salud antes y después del vuelo con el lleno de los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, la toma de muestras para el examen molecular de Covid19 48 horas antes del vuelo y la publicación de los resultados de 24 a 12 horas antes del vuelo y, actividades de tamizaje que incluyen entre otras, la toma de temperatura e instrucciones de buenas prácticas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de limpieza, desinfección y esterilización de la aeronave y equipaje; la realización de pruebas a la tripulación, y el suministro y adecuado uso de los elementos de protección personal para todas las personas que participan en la operación.

Ahora bien, cuando quiera que los trabajadores deben desplazarse por vía terrestre, igualmente cuentan con un protocolo de bioseguridad que incluye el distanciamiento social, el uso y

⁴ Las personas que tengan algún síntoma deben permanecer en su hogar.



manipulación adecuado de los elementos de protección, el lavado de manos, la toma de temperatura y la desinfección y limpieza de los vehículos.

Cualquiera que sea el medio de desplazamiento, y para todos los trabajadores residentes en Arauca, las pruebas moleculares para detección de Covid19 son igualmente practicadas, adelantándose el siguiente procedimiento: la toma de la muestra se lleva a cabo en Bogotá, Bucaramanga o Arauca, pues son los únicos lugares donde se cuenta con equipo especializado, y desde las dos últimas ciudades son remitidas a Bogotá para su procesamiento. Para la toma de muestras a los trabajadores de contratistas y subcontratistas, su empleador se encarga de ubicarlos en los laboratorios designados para el efecto, y desde ese laboratorio, las pruebas son remitidas a la ciudad de Bogotá.

Conforme a lo anterior, aceptar la tesis planteada por el accionante en cuanto a la supuesta violación legal que se configura por la utilización de vuelos charter, no tiene ningún asidero, no solo por las razones expuestas en precedencia, sino porque la totalidad de los vuelos realizados han contado con los permisos necesarios de la Aeronáutica Civil, que es la autoridad competente para concederlos. De hecho, como se puede consultar en la página de esta última entidad, desde el 24 de marzo del presente año, se han autorizado 608 vuelos nacionales para la prestación de los servicios puntuales de minas y energía, que es la excepción que cobija a mi representada, de los cuales únicamente 28 han sido a la ciudad de Arauca.

El hecho 1.7: No es un hecho. Se reitera lo expuesto al dar contestación a los hechos 1.2 a 1.5, donde se evidencia que como lo señala el tutelante, por la circunstancia de ser Occidental de Colombia, LLC una compañía que hace parte de un sector exceptuado de la orden de aislamiento, ello no implica que pueda desconocer los lineamientos legales, lo cual, no solo no ha hecho, sino que por el contrario, ha cumplido en exceso con las directrices trazadas desde el Ministerio de Salud para prevenir y morigerar el riesgo de contagio del virus, adoptando medidas mucho más estrictas, como la práctica de la prueba molecular desde antes que la misma se hiciera obligatoria en el Departamento de Arauca, que en todo caso la exige desde el 11 de mayo solo para trabajadores migrantes, y mi representada la practica desde hace más de un mes, tanto a migrantes como a residentes en Arauca que pretendan ingresar a los campos petroleros.

Los hechos 1.8, 1.9 y 1.10: No son hechos, sino transcripciones de disposiciones legales.

El hecho 1.11: No es cierto. Mi representada no ha adelantado ninguna actuación irregular en el uso de vuelos domésticos en charter como temerariamente lo afirma el accionante. Se reitera lo expuesto al dar contestación al hecho 1.6.

El hecho 1.12: No es cierto. Como se expuso al inicio del presente documento, el actor construye la acción de tutela sobre una premisa fáctica que no corresponde a la realidad, cual es que el trabajador de la empresa contratista fue el primer caso de Covid19 en el Departamento de Arauca, desconociendo que el día 4 de mayo de 2020 -fecha para la que el trabajador de Sodexo SA hasta ahora estaba arribando a la ciudad de Arauca- le fue tomada muestra para presencia de Covid19 a un menor de 6 meses, cuyo resultado fue positivo y que por ende, en nada se relaciona con el del trabajador de Sodexo como expresamente lo confirmó el director de la Unidad Administrativa de Salud de Arauca en los medios.



De esta manera, y tal como se encuentra publicado en los diferentes medios de comunicación y en la página oficial de la Gobernación de Arauca, el primer caso de Covid19 en el Departamento es el del menor de 6 meses. Si bien el resultado de la prueba llevada a cabo a este menor fue conocido únicamente hasta el 12 de mayo a pesar de haberla practicado el día 4 del mismo mes y año, no se puede desconocer que no es el trabajador de la contratista de Occidental de Colombia, LLC el primer caso de Covid19 en Arauca, como temerariamente lo indica el actor para asegurar por esa vía que mi representada tiene la responsabilidad de “la importación” del Covid al Departamento.

Como se indicó en precedencia, la realización de las pruebas contratadas por Occidental de Colombia LLC con el laboratorio Colcan, tiene como ventaja la celeridad en los resultados, siendo esta la razón por la cual, a pesar de que incluso al trabajador de Sodexo SA le fue practicada la prueba molecular después de la muestra tomada al menor de 6 meses, el resultado de aquel fue conocido de manera preliminar al del menor -8 y 12 de mayo respectivamente-.

Los hechos 1.13 y 1.14. No me constan las gestiones que se adelantarían frente a los sectores productivos y de comercio en Arauca, pero en todo caso, en el Departamento de Arauca, por lo menos desde antes del día 4 de mayo de 2020, ya había un caso de Covid19, que es el del menor de 6 meses, pues ese día fue en el que le tomaron las muestras para detectar la presencia de Covid19, arrojando un resultado positivo.

El hecho 1.15. No es cierto como está redactado. Se reitera que, si bien el resultado positivo para Covid19 arrojado ante la muestra llevada a cabo al trabajador del contratista de mi representada fue el primero reportado en la ciudad de Arauca, no puede ser visto como el paciente 0 en ese departamento, en tanto el primer caso se trata de un menor de 6 meses, conforme se puso de presente previamente. En todo caso, ninguna responsabilidad puede endilgarse a mi representada por el resultado positivo de la prueba al trabajador de una empresa contratista, cuando y como se ha destacado en apartes anteriores, Occidental de Colombia, LLC ha adoptado todas las medidas a su alcance, incluso mucho más allá de los lineamientos legales, y lo propio vienen haciendo las empresas contratistas, luego el contagio con el virus de una persona que ni siquiera alcanzó a ingresar al campo petrolero para la prestación de sus servicios, claramente no tiene relación causal de ningún orden con la adopción de tales medidas.

El hecho 1.16. No me constan las manifestaciones llevadas a cabo por la USO, pero en relación con lo presuntamente dicho, vale la pena señalar que: (i) Arauca, y como ya se ha mencionado varias veces, no se encontraba libre de contagio para el momento en que el trabajador de Sodexo SA llegó a la ciudad; (ii) Mi representada sí lleva a cabo pruebas moleculares a todas las personas que pretendan ingresar al Campo y por ende, a todas las personas que ingresen al departamento para los efectos; y (iii) De acuerdo con la información que nos fue suministrada por Sodexo SA, el cargo que desarrolla el trabajador contagiado es un cargo calificado, habiéndose dado cumplimiento a lo normado en el Decreto 1668 de 2016 en lo que hace referencia a la búsqueda de mano de obra local, con la priorización del municipio correspondiente al área de influencia, municipios limítrofes y municipios que hacen parte del Departamento, sin haber encontrado a nadie con el perfil calificado, razón por la cual la búsqueda se amplió a nivel nacional.



El hecho 1.17. No me consta, se trata de la transcripción de una presunta noticia de periódico, sin especificar la fecha de publicación.

El hecho 1.18. Aunque no es un hecho sino una intuición del accionante, NO ES CIERTO que el trabajador de Sodexo SA de manera previa a iniciar su viaje para ingresar al Campo Petrolero a prestar sus servicios conociera que era portador del Covid19. De hecho, de acuerdo con la información suministrada por la contratista, antes de cada desplazamiento, sus trabajadores hacen una declaración sobre su estado de salud, siendo obvio que, si un trabajador conoce que es portador del virus, debe permanecer en su casa.

De esta manera, la afirmación contenida en este hecho no solo carece de todo juicio, sino que incluso podría constituir un tipo penal, pues se asegura que una persona conocedora y consciente de portar Covid19, intencionalmente se desplazó y presentó en una ciudad diferente a la de su domicilio para poner en riesgo a toda una comunidad.

El hecho 1.19. No me constan las afirmaciones que haya llevado a cabo el Gobernador de Arauca en la entrevista mencionada, pero lo que, si sabemos, gracias a la información suministrada por Sodexo S.A., es que el trabajador de la contratista no manifestó el que de manera previa al 8 de mayo conociera que era portador del virus.

El hecho 1.20 Occidental de Colombia, LLC entiende que el trabajador de la contratista efectivamente llegó al Departamento de Arauca por vía terrestre, desplazamiento en el que, y conforme se indicó en precedencia, los trabajadores de la empresa contratista debieron cumplir con el protocolo de bioseguridad que para el efecto tiene adoptado su empleador, protocolo que se encuentra estructurado de manera armónica con la operación propia de mi representada.

El hecho 1.21. Occidental de Colombia, LLC desconoce el número de huéspedes y personal del hotel Cima Real, pues en todo caso dichos huéspedes no ostentan la condición de trabajadores suyos. No obstante, una vez conocido, entendemos que las entidades de salud del departamento de Arauca están adelanta las gestiones pertinentes para que se tomen las muestras necesarias al personal del hotel, las contramuestras a los otros trabajadores del contratista y a las personas que hagan parte del cerco epidemiológico respectivo.

El hecho 1.22. Aunque no es un hecho sino una presunción del actor, cabe aclarar que una vez conocido el resultado positivo el día 8 de mayo de 2020, Occidental de Colombia, LLC a través de su personal médico, procedió a indagar con la contratista para obtener de esa manera información certera que permitiera conocer los respectivos cercos epidemiológicos, conociendo que las personas que se encontraban en el hotel en calidad de huéspedes son trabajadores de la contratista, y en ningún momento salieron a tomar transportes públicos o en general a llevar a cabo actividades personales.

El único momento en que los trabajadores de la contratista se movilizaron, lo hicieron en vehículos particulares con destino al sitio en que se tomaron las muestras, regresando al hotel y guardando el aislamiento correspondiente. De hecho, nos fue informado por la contratista, que para estos



eventos -hospedaje en el hotel a la espera de los resultados- se prevé que la entrega y toma de alimentos se lleve a cabo por los trabajadores sin contacto alguno con terceros.

El hecho 1.23. Aunque no es un hecho sino la transcripción de una norma legal, debemos indicar que en efecto, el servicio hotelero se encuentra habilitado para atender a sus huéspedes, en actividades “*estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del corona virus Covid19*”. Así, en la medida que según entendemos, Sodexo SA lo que hizo fue alquilar el espacio para sus trabajadores, quienes se encuentran aislados entre sí con el fin de esperar los resultados de la prueba, es claro entonces que se trata de un acto responsable, alineado con los protocolos de bioseguridad necesarios para prevenir y mitigar el Covid19, y por ende, que no desconoce la excepción transcrita.

El hecho 1.24. No me consta qué hayan dicho las autoridades en la rueda de prensa llevada a cabo el día 9 de mayo de 2020.

Los hechos 1.25. y 1.26. No son hechos sino apreciaciones personales del demandante, sobre las que no nos es dado pronunciarnos.

El hecho 1.27. No obstante que como se ha indicado, la persona contagiada no es trabajador de mi representada, en las averiguaciones llevadas a cabo por Occidental de Colombia, LLC con la contratista, pudimos conocer que su trabajador se desplazó hacia el municipio de Arauca en un vehículo particular, con las condiciones de asepsia y seguridad correspondientes.

El hecho 1.28. No es un hecho sino una consideración del actor, sobre la que reiteramos lo expuesto al dar contestación al hecho 1.6.

El hecho 1.29. No es cierto. Ni mi representada ni sus empresas contratistas han puesto en riesgo a la comunidad araucana. Todas las medidas de bioseguridad se han adoptado con estricto apego no solo a la ley, sino a la finalidad de conservar la salud de las personas.

El hecho 1.30. Aunque no es un hecho sino una apreciación -infundada y temeraria- del accionante, debe destacarse que la continuidad en la prestación del servicio de mi representada no tiene origen en su propia y caprichosa voluntad, sino en una orden del Gobierno Nacional, porque Occidental de Colombia, LLC presta un servicio esencial.

Así mismo y como ya ha quedado lo suficientemente relatado, mi representada no ha incumplido ninguna disposición legal.

El hecho 1.31. No es un hecho sino una aseveración de índole personal por parte del actor.

El hecho 1.32. No es un hecho. Se trata de una afirmación personal del demandante, no obstante lo cual se confirma que como es de público conocimiento, el Covid19 es una enfermedad que evidentemente acarrea un peligro para la salud de todas las personas, y es por esa peligrosidad precisamente que se declaró el estado de emergencia social y económica en el territorio nacional



y que se han adoptado particularmente por la entidad que represento, todas las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del virus.

III. CONCLUSIONES

Atendiendo lo señalado en precedencia al dar contestación a cada uno de los hechos contenidos en la acción de tutela, se tiene que:

- a) Occidental de Colombia LLC no solo ha dado cumplimiento a las obligaciones que la ley dispone, sino que incluso ha ido más allá, actuando de manera diligente y con evidente sentido de responsabilidad social, al incluir en sus protocolos de bioseguridad, mucho antes de la existencia de una obligación legal que así lo dispusiera -Decreto 048 de 2020-, la realización de pruebas moleculares a la totalidad de personas que pretendan ingresar al Campo Petrolero, y obviamente, a todas aquellas que pretendan ingresar al departamento de Arauca para los efectos.
- b) Los protocolos de bioseguridad de Occidental de Colombia, LLC se encuentran engranados con aquellos propios de los contratistas, que estos últimos adoptan en su condición de empleadores.
- c) Los protocolos de bioseguridad tanto de Occidental de Colombia, LLC como de los contratistas son permanentemente actualizados conforme las recomendaciones impartidas tanto por el Gobierno Nacional como por las autoridades locales.
- d) Dentro de los protocolos de bioseguridad, se encuentran previstos no solo los momentos y actividades cotidianas en la realización de las labores por los trabajadores, sino los que son de obligatorio cumplimiento en el desplazamiento desde y hacia sus hogares cuando hay cambio de turno, y la permanencia en estos.
- e) El eje fundamental de los argumentos de la acción de tutela, consistente en que el primer caso de Covid19 en Arauca fue el del trabajador de la contratista de mi representada, se encuentra desvirtuado, pues el primer caso de Covid19 en el departamento lo fue el de un menor de 6 meses, a quien le tomaron la muestra el día 4 de mayo de 2020 pero los resultados sólo se conocieron hasta el 12 del mismo mes y año.
- f) De acuerdo con la información que tiene mi representada, no es cierto que el trabajador de Sodexo SA se presentara en Arauca con plena consciencia de que era portador del virus Covid19, así como tampoco es cierto que él o los demás huéspedes del hotel hubieran salido a realizar actividades personales o en general hubieran tomado transporte público y tenido contacto inseguro con terceros.
- g) De acuerdo con la información suministrada por Sodexo SA a mi representada, la contratación de su trabajador proveniente de un lugar diferente a la región se dio en estricto cumplimiento de lo normado en el Decreto 1668 de 2016, pues se trata de un cargo calificado cuyo perfil no fue cumplido por ningún habitante de las áreas de influencia.
- h) No se halla vulnerado ningún derecho fundamental del actor que merezca la necesidad de emitir un pronunciamiento urgente vía tutela con el fin de buscar su protección.

Por las razones expuestas y por quedar plenamente acreditada la ausencia de responsabilidad de **OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC**, deberá denegarse por improcedente la acción de tutela de la referencia.



IV. ANEXOS

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC.
2. Dashboard con información de vuelos de la Aerocivil
3. Impresión de la noticia publicada por la Gobernación de Arauca sobre primer caso de Covid en el departamento. En el link de la mencionada noticia se puede observar el video en el que el director de UAESA afirma que no se relacionada con el del empleado del contratista Sodexo.
4. Protocolo de bioseguridad en materia de transporte aéreo.
5. Protocolo de Bioseguridad -ya se encuentra en el expediente-
6. Protocolo para cambio de turno -ya se encuentra en el expediente-

V. NOTIFICACIONES

Recibiremos notificaciones en el correo electrónico Bogota-notificaciones-judiciales@oxy.com.

Atentamente,

OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC

JUAN FERNANDO ACEVEDO LIZCANO
Apoderado General Suplente

Anexo lo anunciado.